



Magistrado ponente: Dr. Jorge Dussán Hitscherich

RESOLUCION No. CSJHUR20-67
28 de febrero de 2020

“Por la cual se resuelve una solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa”

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias conferidas en el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA11- 8716 de 2011 y según lo aprobado en sesión ordinaria del 19 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

1. Antecedentes
 - 1.1. El señor Michael Steward Vanegas Gómez, mediante escrito radicado el 6 de febrero de 2020, informa que lleva 14 meses y 20 días recluso en la cárcel de mediana seguridad de La Plata y hasta la fecha no se le ha asignado juzgado a que tiene derecho para que vigile y supervise la pena impuesta.
 - 1.2. Agrega que por no tener asignado juzgado no ha podido solicitar los beneficios o subrogados penales. Por lo que solicita que el Consejo Seccional de la Judicatura vigile dicha situación.
 - 1.3. Realizada la consulta de procesos en la página Web de la Rama Judicial se pudo constatar que el proceso a que hace referencia el quejoso es el radicado con el número 2018-01575-02, cuyo conocimiento corresponde al Juzgado 02 Promiscuo del Circuito de La Plata.
 - 1.4. Así mismo, se observa que dicho proceso fue recibido el 3 de febrero de 2020 en el Juzgado 04 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para el seguimiento de la pena impuesta al condenado.
 - 1.5. En virtud al artículo 5º del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, con auto del 7 de febrero de 2020, se dispuso requerir al doctor Hernando Cuellar Trujillo, Juez 02 Promiscuo del Circuito de La Plata, para que rindiera las explicaciones del caso.
 - 1.6. El doctor, Hernando Cuellar Trujillo, dentro del término dio respuesta al requerimiento, señalando que:
 - 1.6.1. El 11 de diciembre de 2019, se profirió sentencia condenatoria en contra del señor Michael Steward Vanegas Gómez por el delito de estupefacientes.
 - 1.6.2. Manifestó que el 28 de enero de 2020 se remitió la ficha técnica del proceso, por correo electrónico y en físico al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva.
 - 1.6.3. Afirmó que en los meses de noviembre y diciembre se evacuaron las audiencias de lectura de fallo, por lo que hubo varios procesos que fueron remitidos para informe de sentencia.
 - 1.6.4. Argumentó que en la segunda semana de diciembre no se tuvo servicio de fotocopidora, con lo que se imposibilitaba la remisión de las dos copias del fallo a los Juzgados de Ejecución de Penas.
 - 1.6.5. Agrega que el despacho salió a vacancia judicial el 20 de diciembre de 2019 hasta el 13 de enero de 2020, y que al regreso de la vacancia debieron iniciar la elaboración de la estadística, el conteo de procesos y otras labores prioritarias.

2. Marco Jurídico de la Vigilancia Judicial

Con fundamento en los hechos expuestos y las explicaciones dadas por el funcionario, corresponde a esta Corporación entrar a decidir si el servidor judicial ha incurrido en actuaciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de Justicia, a la luz del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para lo cual es pertinente señalar lo siguiente:

- 2.1. La Vigilancia Judicial Administrativa fue establecida por la Ley 270 de 1996 y reglamentada por la Sala Administrativa del Consejo Superior mediante Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, normas que la definen como una herramienta que sirve para verificar que la justicia se administre oportuna y eficazmente, como también para procurar por el normal desempeño de las labores de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial¹.
- 2.2. En el mismo sentido, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Circular PSAC10-53 de 2010, señaló que la Vigilancia Judicial Administrativa es una acción de carácter eminentemente administrativo que busca que la administración de Justicia sea eficaz y oportuna bajo el respeto de la autonomía e independencia judicial (Artículo 230 de la C.P. y 5º de la Ley 270 de 1996).
- 2.3. Según lo dispuesto por el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, la Vigilancia Judicial Administrativa opera cuando un funcionario judicial incurre en prácticas dilatorias o mora judicial injustificada, que atente contra la eficaz y oportuna administración de justicia, situación ésta que conllevaría a la aplicación de una sanción de tipo administrativo.
- 2.4. La mora judicial es definida como "*la conducta dilatoria del Juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso judicial y tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable*"².
- 2.5. Es claro que el ámbito de aplicación de la vigilancia judicial administrativa apunta exclusivamente a que se adelante un control y verificación de términos en el desarrollo de las etapas procesales, en procura de una administración de justicia eficaz y oportuna, para advertir dilaciones injustificadas imputables, bien sea al funcionario o al empleado del despacho donde cursa el proceso.

3. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el doctor Hernando Cuéllar Trujillo, Juez 02 Promiscuo del Circuito de La Plata, incurrió en mora o tardanza injustificada para remitir el proceso penal con radicado número 2018-01575-02, ante los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para ejercer vigilancia de la pena impuesta al señor Michael Steward Vanegas Gómez.

4. Precedente normativo y jurisprudencial: acceso a la administración de justicia y la mora judicial

Los artículos 29 y 228 de la Carta Política y el artículo 4 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), imponen a los servidores judiciales, la obligación de atender los términos procesales. Por su parte, los numerales 1 y 8 del artículo 42 del Código General del Proceso, establecen que es deber del juez velar por la pronta solución del proceso, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización, procurar la mayor economía procesal y dictar las providencias dentro de los términos legales.

Sobre el alcance de estas disposiciones, la Corte Constitucional señaló:

¹ Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, artículo 1º.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de abril de 2008. Consejero Ponente: Dr. Héctor J. Romero Díaz. Rad.: 11001-03-15-000-2008-00324-00

“La jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos. Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”³.

Asimismo, la Corte Constitucional ha expresado que a los funcionarios no les basta con aducir exceso de trabajo o una significativa acumulación de procesos para que el incumplimiento de los términos judiciales sea justificado, pues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicción la ineficiencia o ineficacia del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales⁴.

De igual manera, es pertinente reiterar lo señalado por la jurisprudencia en cuanto que la justificación de la mora debe ser extraordinaria y no puede simplemente argumentarse la congestión de los asuntos al despacho, pues es necesario que *“el juez correspondiente ha obrado con diligencia y cumplido a cabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y legales, de modo tal que la demora en decidir sea para él el resultado de un estado de cosas singularizado y probado que se constituya en motivo insuperable de abstención”⁵ o, como se afirmó en la Sentencia T-1068 de 2004, “no puede aducirse por parte de un juez de la República que se cumplen las funciones a él encargadas para un negocio y se desatienden en otro”⁶.*

Complementando esta posición, la misma Corporación señaló lo siguiente:

“Se está ante un caso de dilación injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. La dilación injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar”⁷.

Vale la pena agregar que en la Sentencia T-292 de 1999, la Corte Constitucional llega a sostener que el análisis de cada situación debe hacerse en “un sentido exigente”, de manera que solo si se encuentra “probada y establecida fuera de toda duda” la justificación de la conducta, puede exonerarse al servidor judicial de su obligación de resolver oportuna y eficazmente los asuntos a su cargo. En efecto, la providencia comentada sostiene lo siguiente:

“Las situaciones, para que configuren justificación en cuanto a la mora del juez, deben ser examinadas en cada caso específico con el carácter extraordinario que les corresponde, tanto por el juez de tutela como por el disciplinario, con un sentido exigente y sin laxitud, con el fin de impedir que la extensión de las razones justificativas convierta en teórica la obligación judicial de resolver con prontitud y eficacia. Solamente una justificación debidamente probada y establecida fuera de toda duda permite exonerar al juez de su obligación constitucional de dictar oportunamente las providencias a su cargo, en especial cuando de la sentencia se trata. La justificación es extraordinaria y no puede provenir apenas del argumento relacionado con la congestión de los asuntos al despacho”.

Como complemento de lo anterior, la Corte Constitucional también ha precisado que es al funcionario a quien le corresponde demostrar que obró con diligencia, como se afirma en la siguiente providencia:

³ Sentencia T-577 de 1998.

⁴ Sentencia T-604 de 1995.

⁵ Sentencia T-292 de 1999.

⁶ Citada en la Sentencia T-030 de 2005.

⁷ Sentencia SU394 de 2016. Además, pueden consultarse las siguientes Sentencias: T-502 de 1997, T-292 de 1999, T-1226 de 2001, T-803 de 2012 y T-230 de 2013.

“[...] la mora judicial solo se justificaría al magistrado, juez o fiscal si a pesar de que éstos agotaron todas las medidas para evitar la congestión del despacho judicial, aun así la dilación surge de forma imprevisible e ineludible. Debiéndose en todo caso informarse de esa situación a los administrados quienes tienen derecho a conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos. Lo contrario sería asumir como constitucionalmente válido que el administrado deba ser sometido a una espera indefinida en la resolución de su demanda de justicia, situación que repugna al Estado social de derecho dada la garantía material y no meramente formal de los derechos que en él se prohija.

La Sala precisa, entonces, que el hecho de que la dilación en el trámite judicial no sea imputable a conducta dolosa o gravemente culposa alguna del funcionario, sino al exceso de trabajo que pesa sobre los despachos judiciales, puede, en principio, exculpar a aquellos de su responsabilidad personal, pero no priva a los administrados del derecho a reaccionar frente a tales retrasos, ni permite considerarlos inexistentes. En otras palabras, dicha situación, no autoriza a considerar que la dilación es justificada, sin prueba alguna de que se haya intentado agotar todos los medios que las circunstancias permiten para evitarla. De esta manera el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial”⁸.

En este sentido, si se presenta mora judicial en un proceso, debe demostrarse que se presentaron circunstancias insuperables, no atribuibles al funcionario, como ocurre cuando se interponen recursos ante el superior, se presentan incidentes o en aquellos casos en que debe interrumpirse o suspenderse el trámite del proceso.

También es posible admitir un retardo normal en las decisiones que deben adoptarse cuando el funcionario demuestre que ha actuado de manera diligente, adelantando las actuaciones procesales en plazos razonables, atendiendo a la carga laboral de su despacho y a la complejidad del asunto que conoce.

5. Análisis del caso concreto

La presente vigilancia judicial administrativa se inició con el informe presentado por el señor Michael Steward Vanegas Gómez, indicando que el Juzgado 02 Promiscuo del Circuito de La Plata, no ha remitido el proceso penal con radicado número 2018-01575-02, ante los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para que vigilen a la pena impuesta.

5.1. Reseña procesal

De la respuesta dada por el funcionario requerido, se observa que dentro del proceso objeto de la presente vigilancia judicial, se realizaron las siguientes actuaciones:

Fecha	Actuación
11/12/2019	Se profirió sentencia condenatoria en contra del señor Michael Steward Vanegas Gómez.
28/01/2020	Se remitió la ficha técnica del proceso penal al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, a través de correo electrónico y físicamente.

Sea lo primero precisar que, si bien es cierto no existe una norma expresa que establezca un término para remitir el expediente junto con la ficha técnica al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 159 CPP, lo cual significa, en el presente caso, que el funcionario debió haber remitido dicho proceso para la ejecución de la pena impuesta en un término no mayor a 5 días.

Sin embargo, observa esta Corporación que, durante el intervalo de mora presentado, sucedió la vacancia judicial, periodo en el que opera la suspensión de términos procesales, lo que permite

⁸ Sentencia T-030 de 2005.

inferir que tal circunstancia pudo haber ocasionado la tardanza para remitir el proceso mencionado junto con la ficha técnica al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez vigilado debió desplegar acciones antes de salir a la vacancia judicial que le permitieran cumplir con sus obligaciones, remitiendo a la mayor brevedad posible, la sentencia y la ficha técnica al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva; razón por la cual, aunque no se encuentra mérito para abrir vigilancia judicial administrativa, si se insta al funcionario para que en lo sucesivo ejecute dichas acciones en beneficio de las personas, que por obvias razones, se encuentran en claras condiciones de inferioridad.

6. Conclusión.

Analizadas en detalle las situaciones fácticas puestas de presente en los numerales anteriores, este Consejo Seccional no encuentra mérito para abrir el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa en contra del doctor Hernando Cuellar Trujillo, Juez 02 Promiscuo del Circuito de La Plata, por no reunirse los presupuestos señalados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para tal fin.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. ABSTENERSE de abrir el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa en contra del doctor Hernando Cuellar Trujillo, Juez 02 Promiscuo del Circuito de La Plata, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al señor Michael Steward Vanegas Gómez en su condición de solicitante y al doctor Hernando Cuellar Trujillo, Juez 02 Promiscuo del Circuito de La Plata, como lo disponen los artículos 66 a 69 CPACA.

ARTÍCULO 3. Contra la presente decisión procede únicamente el recurso de reposición, por ser éste trámite de única instancia a la luz de la Ley 270 de 1996 y del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, el cual de conformidad al artículo 74 del CPACA deberá interponerse ante esta Corporación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 ibídem.

ARTÍCULO 4. Una vez se adelante el trámite correspondiente y en firme el presente acto administrativo, las diligencias pasaran al archivo definitivo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE

Dada en Neiva, Huila.



EFRAIN ROJAS SEGURA
Presidente

ERS/JDH/STUC